

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFJ079713

TRIBUNAL SUPREMO

Auto de 6 de noviembre de 2020

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Rec. n.º 3420/2020

SUMARIO:

IBI. Base imponible. Vías impugnatorias. Gestión. Existe jurisprudencia -a los efectos de valoración catastral para IBI- sobre las consecuencias de la inexistencia de desarrollo urbanístico aprobado, así como sobre las consecuencias de la declaración de nulidad del planeamiento urbanístico; jurisprudencia que interpreta, con arreglo al art. 7.2.b) (TR Ley del Catastro Inmobiliario), que tales suelos merecen la valoración de suelos rústicos. Sin embargo, no existe pronunciamiento sobre si dicha doctrina es trasladable a aquellos terrenos en los que, aun constatándose la existencia de un desarrollo pormenorizado, la programación se encuentra suspendida sine die, por no solventarse el problema de inundabilidad (a la espera de la aprobación del proyecto de encauzamiento). Esto es, no existe jurisprudencia sobre si en estos supuestos de suspensión indefinida de la ejecución del Sector puede equipararse a una declaración de nulidad. En los AATS, de 19 de enero de 2018, recurso n.º 4628/2017 (NFJ069971), referido al IIVTNU, y de 14 de febrero de 2019, recurso n.º 7302/2018 (NFJ078891) se establecía la necesidad de determinar si la anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector como suelo urbanizable, conlleva que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable y, en consecuencia, no puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales, dando lugar a la nulidad de las declaraciones giradas del IBI. La STS de 5 de marzo de 2019, recurso n.º 1431/2017 (NFJ072837), entre otras, ha declarado que "La interpretación conjunta de los arts. 61.3, 65, 77.1 y 5 del TRLHL, así como de los arts. 4 y 7.2 del TR Ley del Catastro Inmobiliario permite, mediante la impugnación de las liquidaciones por IBI y en las excepcionales circunstancias de este caso, discutir el valor catastral del inmueble (base imponible del impuesto), aun existiendo una valoración catastral firme en vía administrativa, excepcionalidad representada por una situación urbanística de absoluta inestabilidad, derivada de varios recursos jurisdiccionales, declaraciones de nulidad e intentos de subsanación a posteriori, en el marco de la anulación de las disposiciones que clasificaban un sector como suelo urbanizable, con incidencia directa sobre la consideración catastral como urbano o rústico del bien inmueble en cuestión -al comportar que los terrenos afectados volviesen a tener la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección- en virtud de múltiples sentencias, algunas de las cuales, además, fueron dictadas con posterioridad al acto de alteración catastral, de manera que no pudieron ser invocadas frente a dicho acto por los interesados. La cuestión que presenta interés casacional consiste precisar la jurisprudencia sentada en las sentencias del TS mencionadas en el fundamento de derecho primero de esta resolución, a fin de determinar si resulta trasladable a supuestos en los que, aun estando los terrenos clasificados catastralmente como urbanos, por estar ubicados en ámbito espacial sectorizado con ordenación pormenorizada, su programación no se ha desarrollado por encontrarse suspendida sine die, de modo tal que pudiera entenderse que los terrenos afectados deber ser clasificados como suelo rústico no urbanizable o rústico a efectos de la eventual nulidad de declaraciones giradas en concepto de IBI [Vid., STSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de febrero de 2020, recurso n.º 1495/2017 (NFJ079714), contra la que se plantea el recurso de casación].

PRECEPTOS:

RDLeg. 1/2004 (TR Ley del Catastro Inmobiliario), art. 7.

RDLeg. 2/2004 (TR LHL), art. 65.

PONENTE:

Don Ángel Ramón Arozamena Laso.

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: PRIMERA

A U T O

Fecha del auto: 06/11/2020

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 3420/2020

Materia: OTROS TRIBUTOS

Submateria:

Fallo/Acuerdo: Auto Admisión

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M. Concepción Riaño Valentín

Secretaría de Sala Destino: 003

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 3420/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M. Concepción Riaño Valentín

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: PRIMERA

AUTO

Excmos. Sres.

D. Luis María Díez-Picazo Giménez, presidente

D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo

D. César Tolosa Tribiño

D. Ángel Ramón Arozamena Laso

D. Dmitry Berberoff Ayuda

En Madrid, a 6 de noviembre de 2020.

HECHOS

Primero.

La procuradora de los Tribunales D.^a Catherine Biasoli López, en representación de D. Jose Pedro ha presentado escrito preparando recurso de casación contra la sentencia n.º 253/2020, de 7 de febrero, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso n.º 1495/2017.

En dicha sentencia, la Sala de instancia desestima el recurso interpuesto contra la desestimación presunta de la reclamación económico-administrativa promovida contra la previa desestimación por silencio de su solicitud de modificación del valor catastral del suelo del inmueble de su propiedad, pretendiendo su valoración como rústico y no como urbano, al hallarse suspendida la programación por inundabilidad del terreno, pendiente la aprobación del proyecto de encauzamiento del barranco de la Parreta.

Ante la pretensión de la parte de que se declare la nulidad del valor catastral asignado a la finca (que considera sigue siendo rústico y no urbano) y se le reconozca el derecho a la devolución del IBI desde el ejercicio 2007, la Sala tiene en cuenta los siguientes elementos para desestimar el recurso:

(i) La finca está calificada como suelo urbanizable, radica en un suelo delimitado y reparcelado como urbanizable por el planeamiento, y sectorizado, si bien carece de desarrollo urbanístico, pero con agente urbanizador nombrado y programación suspendida pero no caducada y con valoración del suelo realizada teniendo en cuenta un coeficiente reductor M: 0,80 como consecuencia de las condiciones de falta de encauzamiento del barranco de la Parreta.

(ii) El valor catastral litigioso resultó de un procedimiento simplificado de valoración colectiva en el municipio de Benicàssim, que finalizó por acuerdo de 27 de junio de 2006 y con efectos desde el 1 de enero de 2007, siendo firme por no haber sido cuestionado.

(iii) Tras la modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario por la Ley 13/2015, de 24 de junio, se llevaron a cabo en el año 2015 procedimientos simplificados de valoración colectiva para adecuar la clasificación y valoración catastral de los bienes inmuebles de Benicàssim a dicha modificación. Sin embargo, añade, el sector PRR6 ostenta la clasificación de suelo urbanizable con ordenación pormenorizada y tiene proyecto de reparcelación aprobado e incorporado a la base de datos catastrales, por lo que no se vio afectado por ninguno de estos procedimientos.

Por último, transcribe la Disposición transitoria segunda y la Disposición transitoria séptima del TRLCI, y toma en consideración que en la ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos del municipio de Benicàssim, conforme al artículo 7 del TRLCI aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se considera como suelo de naturaleza urbana, entre otros, "los terrenos que tengan la consideración de urbanizables según el planeamiento y estén incluidos en sectores". Y añade que los valores catastrales discutidos gozan de la condición de firmes y consentidos, sin que nos encontremos ante ningún supuesto de nulidad de pleno derecho, y concluye: "En consecuencia, siendo plenamente aplicable este criterio al supuesto planteado en este proceso, que se sustenta en sentencias recientes dictadas por la Sala como la n.º 1381/2017, de 11 de diciembre, recurso 1381/2017, aclarada por auto de fecha 15-1-2020, por razones de seguridad jurídica y unidad de criterio, así como teniendo en cuenta la firmeza e inatacabilidad del valor catastral firme anterior, sin que sea aplicable la reforma operada a partir de 2015, procederá desestimar el recurso contencioso-administrativo". Debemos aclarar que, sin duda, se refiere a la STSJ n.º 1790/2019, de 11 de diciembre de 2019 -recurso n.º 1381/2017-, y que ha dado lugar al auto de 16 de octubre de 2020 por el que se admitió el recurso de casación n.º 1196/2020 preparado contra la misma.

Segundo.

Notificada la anterior sentencia, la representación procesal del recurrente ha preparado recurso de casación en el que, tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, denuncia la infracción del artículo 7.2.b) del real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y las Disposiciones transitorias segunda y séptima del Texto Refundido de la citada Ley del Catastro Inmobiliario, introducidas por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Denuncia, asimismo, la infracción de la jurisprudencia sentada en la STS de 19 de febrero de 2019 (RCA 128/2016) en relación con la posibilidad de impugnación de valores catastrales que gozan de la condición de firmes y consentidos; así como de la jurisprudencia que reitera la STS, de 30 de mayo de 2014, en las SSTs de 2 de abril de 2019 (RCA 2154/2017), de 5 de marzo de 2019 (RCA 1431/2017) o de 7 de mayo del mismo año (RCA 4570/2017) en relación con la nulidad de las liquidaciones giradas por IBI por no realizarse el hecho imponible, ya

que el suelo debía considerarse rústico y no urbano. En el mismo sentido, y de forma contradictoria con la sentencia que se recurre, se ha pronunciado el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en las sentencias que cita; siendo otras muchas las que se pronuncian de forma diferente respecto de la fijación de la fecha de la nueva valoración de la finca como rústica.

En definitiva, considerar que la clasificación como urbana de la parcela de la recurrente es correcta con arreglo a la Disposición transitoria séptima de la Ley 13/2015, de 24 de junio, sin tener en cuenta que, aunque cuenta con instrumento de desarrollo aprobado, su ejecución no llegó siquiera a iniciarse, encontrándose suspendida sine die desde el año 2009 por falta de solución hídrica, siendo que el Ayuntamiento, ante la imposibilidad de llevar a cabo las obras, procedió a incoar el procedimiento de resolución y desprogramación de dicho Sector, solicitando a la Gerencia Territorial del Catastro que procediera a su valoración como rústicas. La sentencia recurrida obvia, además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite impugnar los valores catastrales firmes en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales.

Por lo que concierne al interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia invoca, en primer lugar, la concurrencia de la presunción prevista en el artículo 88.3.a) LJCA. Alega, en este sentido, que existe jurisprudencia -a los efectos de valoración catastral para IBI- sobre las consecuencias de la inexistencia de desarrollo urbanístico aprobado, así como sobre las consecuencias de la declaración de nulidad del planeamiento urbanístico; jurisprudencia que interpreta, con arreglo al artículo 7.2.b) TRLCI que tales suelos merecen la valoración de suelos rústicos. Sin embargo, puntualiza, no existe pronunciamiento sobre si dicha doctrina es trasladable a aquellos terrenos en los que, aun constatándose la existencia de un desarrollo pormenorizado, la programación se encuentra suspendida sine die por no solventarse el problema de inundabilidad (a la espera de la aprobación del proyecto de encauzamiento). Esto es, no existe jurisprudencia sobre si en estos supuestos de suspensión indefinida de la ejecución del Sector puede equipararse a una declaración de nulidad.

Mantiene, asimismo, que existe interés casacional porque la doctrina que establece la sentencia que se discute afecta a un gran número de situaciones en sí misma o bien por trascender al caso objeto del proceso [artículo 88.2.c) LJCA], dada la importancia de determinar la naturaleza rústica o urbana del suelo a efectos del IBI no sólo en el recurrente, sino también para otro gran número de impuestos de nuestro sistema tributario y para un gran número de contribuyentes (titulares de inmuebles, fincas y terrenos de los sectores afectados) a los que les incide igualmente en sus respectivos gravámenes.

Considera, finalmente, que concurre la presunción establecida en el artículo 88.3.b) LJCA, por cuanto la sentencia que se recurre se aparta deliberadamente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de discutir la calificación catastral del inmueble en determinados supuestos.

Tercero.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 15 de junio de 2020, emplazando a la partes, habiendo comparecido la procuradora de los Tribunales D.^a Catherine Biasoli López, en nombre y representación de D. Jose Pedro, en concepto de parte recurrente, y, en concepto de parte recurrida, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta.

Es Magistrado Ponente Ángel Ramón Arozamena Laso, .

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero.

Esta Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha admitido, por auto de fecha 16 de octubre de 2020, el RCA 1196/2020, en el que se plantea una cuestión igual a la presente, debiendo llegar en este caso a la misma conclusión.

En dicho auto razonábamos:

"PRIMERO.- Esta Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, tal como apunta el recurrente, ha admitido ya varios recursos -vid. autos de 12 de julio (RCA 1431/2017) y 27 de noviembre de 2017 (RCA 4520/2017), o de 10 de mayo de 2018 (RCA 652/2018)-, donde se plantea una cuestión material similar, que se ha considerado revestida de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

En efecto, en los citados autos se establecía la necesidad de determinar si la anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector como suelo urbanizable, conlleva que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable y, en consecuencia, no puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales, dando lugar a la nulidad de las declaraciones giradas del impuesto de bienes inmuebles.

De igual modo, en autos de 19 de enero de 2018 y 14 de febrero de 2019 se admitieron los recursos RCA 4628/2017 y 7302/2018, respectivamente, que planteaban la misma cuestión que ahora se suscita, si bien, en el primer caso, en cuanto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana ["IIVTNU"] y en el segundo respecto de una ponencia colectiva de valores.

La cuestión jurídica planteada ha sido resuelta por la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 5 de marzo de 2019 (RRCA 1431/2017 y 4520/2017), que propugnan la interpretación sostenida por la mercantil recurrente.

Hay que añadir que en la reciente STS de 30 de enero de 2020 (RCA 3412/2018) esta Sala Tercera, Sección Segunda, ha declarado que "La interpretación conjunta de los artículos 61.3, 65, 77.1 y 5 del TRLHL, así como de los artículos 4 y 7.2 del TRLCI permite, mediante la impugnación de las liquidaciones por IBI y en las excepcionales circunstancias de este caso, discutir el valor catastral del inmueble (base imponible del impuesto), aun existiendo una valoración catastral firme en vía administrativa, excepcionalidad representada por una situación urbanística de absoluta inestabilidad, derivada de varios recursos jurisdiccionales, declaraciones de nulidad e intentos de subsanación a posteriori, en el marco de la anulación de las disposiciones que clasificaban un sector como suelo urbanizable, con incidencia directa sobre la consideración catastral como urbano o rústico del bien inmueble en cuestión -al comportar que los terrenos afectados volviesen a tener la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección- en virtud de múltiples sentencias, algunas de las cuales, además, fueron dictadas con posterioridad al acto de alteración catastral, de manera que no pudieron ser invocadas frente a dicho acto por los interesados.

Segundo.

Teniendo en cuenta lo anterior, asiste la razón al recurrente cuando afirma que no existe un pronunciamiento de esta Sala sobre si la mencionada doctrina es trasladable a un supuesto en el que, aun cumpliéndose aparentemente los requisitos para ser considerado como un terreno urbano -por disponer de programación y sectorialización-, su ejecución se ha visto suspendida suspensión que lleva prologándose durante años al no aprobarse el proyecto de encauzamiento-. Esta suspensión indefinida supone, según el recurrente, una disfunción entre la valoración catastral y la realidad de las cosas que conlleva el pago indebido de IBI y la afectación del principio constitucional de capacidad económica.

Reclama, en relación con las consideraciones precedentes, que se aplique la jurisprudencia de este Tribunal Supremo que permite revisar los valores catastrales firmes en circunstancias excepcionales.

Por ello, cabe considerar que concurre la presunción invocada, sin que se aprecie una manifiesta carencia de interés casacional para la formación de jurisprudencia".

Por lo tanto, planteándose en este recurso la misma cuestión sobre la que en el precedente auto hemos considerado que existe interés casacional, procede, en unidad de doctrina, admitir a trámite el presente recurso de casación.

Segundo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

Tercero.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA, remitiéndolas a la Sección Tercera de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las vigentes reglas de reparto.

LA SECCIÓN DE ADMISIÓN ACUERDA

1.º) Admitir el recurso de casación n.º 3420/2020, preparado por la representación procesal de D. Jose Pedro contra la sentencia dictada el 7 de febrero de 2020 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso n.º 1495/2017.

2.º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en precisar la jurisprudencia sentada en las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo mencionadas en el fundamento de derecho primero de esta resolución, a fin de determinar si resulta trasladable a supuestos en los

que, aun estando los terrenos clasificados catastralmente como urbanos, por estar ubicados en ámbito espacial sectorizado con ordenación pormenorizada, su programación no se ha desarrollado por encontrarse suspendida sine die; de modo tal que pudiera entenderse que los terrenos afectados deber ser clasificados como suelo rústico no urbanizable o rústico a efectos de la eventual nulidad de declaraciones giradas en concepto de impuesto de bienes inmueble.

3.º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: el artículo 7.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en relación con la Disposición transitoria séptima de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria.

4.º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

5.º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

6.º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, competente de conformidad con las vigentes normas de reparto.

Así lo acuerdan y firman.

Luis María Díez-Picazo Giménez Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
César Tolosa Tribiño Ángel Ramón Arozamena Laso
Dimitry Berberoff Ayuda

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.